

PIDE LA CEDHJ AL CONTRALOR DEL ESTADO ACEPTAR LA
RECOMENDACIÓN 1/04

- Es obligación de la dependencia investigar, comprobar y sancionar las irregularidades de los servidores públicos, afirma la Comisión.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) solicitó al contralor del estado, Arturo Cañedo Castañeda, reconsiderar su postura y aceptar la recomendación 1/04, en la que se le pidió instaurar procedimiento administrativo en contra del director del Consejo Estatal del Deporte (Code), Carlos Andrade Garín, por violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica de Francisco Javier Barbosa Gutiérrez, al negarle, sin fundamento legal, el acceso a las instalaciones de esa institución, en donde, desde 1990, prestaba servicio de alimentación a grupos de deportistas.

En la solicitud de reconsideración, la CEDHJ expone que la Contraloría del Estado tiene la obligación de investigar, comprobar y, en su caso, sancionar por la vía administrativa, las irregularidades en que incurran los servidores públicos del Poder Ejecutivo cuando éstas se denuncien a través de un particular, o una institución; el no hacerlo, refleja incumplimiento de las atribuciones que por ley está obligada a realizar.

La Comisión apeló a la vocación de esa institución por combatir la impunidad y velar porque los actos de las autoridades estén impregnados por el respeto a los derechos humanos y confió en que los argumentos expuestos sean suficientes para aceptar la recomendación; en ésta también se pide que se considere la posibilidad de investigar la conducta de Jesús Briceño Espejo, contralor interno del Code, y de María del Rosario Flores Esqueda, jefa del área jurídica, por los mismos hechos. A Carlos Andrade Garín le recomendó restituir al quejoso la posesión del espacio que utilizaba para la preparación y venta de alimentos, así como los bienes muebles de su propiedad localizados en dicha área.

LOS HECHOS

La CEDHJ acreditó violación de los derechos humanos de Francisco Javier Barbosa, ya que el 7 de octubre de 2002, al tratar de ingresar al Code, funcionarios de ese organismo se lo impidieron con el argumento de tener una orden expresa. Carlos Andrade Garín manifestó en su informe de ley que ese día, tanto el contralor interno como la jefa del área jurídica le pidieron a Francisco Javier Barbosa que acreditara su estancia legal dentro de la institución, su autorización para explotar el giro comercial, y la exhibición de documentos que ampararan la propiedad de los bienes muebles que se encontraban en la cafetería. Aseguró que se levantó el acta circunstanciada e inventario respectivo.

Por su parte, el quejoso reiteró que a pesar de tener los documentos que lo acreditan como concesionario del inmueble, los cuales presentó ante esta Comisión, no se le otorgó derecho de audiencia y defensa. Carlos Andrade Garín nunca presentó a la CEDHJ el acta referida y sólo se limitó a cuestionar los documentos exhibidos por el inconforme; adujo que éstos no implicaban que existiera una concesión del inmueble y que en ocasiones anteriores le había solicitado que acreditara su situación legal dentro del organismo. No obstante, el funcionario nunca ofreció documento o testigo alguno, dentro del periodo probatorio, que demostrara que efectivamente había hecho esa solicitud al quejoso. Sin dar parte a la autoridad competente, impidió que Francisco Javier Barbosa continuara haciendo uso del derecho de posesión que tenía sobre la cafetería. Con tal acción, incurrió en ejercicio indebido de la función pública al cerrar el restaurante sin fundamento legal y sin haber demostrado que enteró de manera debida al quejoso de dicha situación.

Para cumplir con la garantía de audiencia consagrada en la Constitución mexicana, deben atenderse dos aspectos: uno de forma y otro de fondo. El primero comprende la existencia de un juicio seguido ante tribunales en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. El segundo pretende evitar que se deje en estado de indefensión al posible afectado. Por lo tanto, en este caso el director del Code incurrió en responsabilidad al no tomar en cuenta ninguno de estos aspectos.

Es importante señalar que en la copia certificada del contrato de concesión del 1 de junio de 1990, se advierte la existencia de un contrato de arrendamiento por tiempo indefinido y, por ende, estaba vigente el día de los hechos.

No pasa inadvertido para este organismo que todo acuerdo de voluntades, como el que se pactó entre el Code y el agraviado, conlleva derechos y obligaciones para ambas partes: para el arrendador, el permiso de utilizar o usufructuar un espacio para un fin determinado, y para el arrendatario, el pago por dicha utilización. En este caso, el agraviado nunca cubrió ningún monto, por lo tanto, incumplió la obligación sostenida con su arrendador. En este sentido, ambas partes están en posibilidad de ejercer las acciones legales que consideren pertinentes ante las instancias que correspondan.

-o0o-